



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 11/08/2.020

Radicado	08001-33-33-014-2020-00130-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Pedro Antonio Oñoro Ramos
Demandado	Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE); Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC);
Vinculado:	Alcaldía de Galapa, Atlántico
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso el expediente de la referencia, contentivo de una acción de tutela, informando que el mismo fue asignado a este Despacho por reparto. Contiene solicitud de Medida provisional.

PASA AL DESPACHO
Para admisión y decidir medida provisional

CONSTANCIA
Acta Individual de Reparto del 10-08-2.020

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, once (11) de agosto de dos mil veinte (2.020)

Radicado	08001-33-33-014-2020-00130-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Pedro Antonio Oñoro Ramos
Demandado	Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE); Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC);
Vinculado:	Alcaldía de Galapa, Atlántico
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

El señor **Pedro Antonio Oñoro Ramos**, presenta demanda en ejercicio de la Acción de tutela contra la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la Confianza Legítima, Transparencia, Principios de Legalidad, Buena Fe, Igualdad, Justicia, Al Trabajo, Acceso A La Carrera Administrativa Por Meritocracia y Debido Proceso.

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

La acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: **“(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando**

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa” 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la mencionada Corte, que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues *“únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”*. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”^{[4].¹}

De igual forma, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios a saber; *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, al manifestar:

“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”

Ahora bien, en el presente caso, el accionante solicita ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil de abstenerse de publicar la lista de elegibles prevista para el día 10 de agosto de 2020 con la finalidad de proteger los derechos fundamentales ante un perjuicio irremediable.

En corcondancia a esa petición, es de advertir al accionante que de las pruebas aportadas, por sí mismas, no acreditan circunstancias de protección constitucional especial, que justifiquen la intervención del juez constitucional en este momento del trámite.

¹ T-733 de 2013

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Así mismo, no se permite siquiera inferir que si se llega a publicar durante el trámite de la presente acción de tutela, la lista de elegibles a la que hace referencia, se lleguen a realizar nombramientos y posesiones para el cargo al que el accionante aspiró y se torne carente de objeto la presente acción.

Por tanto a lo anterior, el Despacho estima que no es pertinente acceder a dicha solicitud, teniendo en consideración que no se constata del material probatorio allegado hasta el momento, una clara y evidente amenaza a un derecho que pueda llegar a convertirse en una vulneración que deba ser atendida de manera urgente, ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por otra parte de las pruebas arrojadas con la demanda de tutela, el Despacho considera que debe vincularse al presente trámite a la **Alcaldía del Municipio de Galapa, Atlántico** por tener interés en las resultas del proceso y ante eventuales ordenaciones que lo afecten.

De otro lado, respecto de la facultad para que el Juez de Tutela pueda decretar pruebas, la Corte Constitucional ha dicho en reciente jurisprudencia, la facultad – deber con que cuenta el Juez Constitucional para poder establecer si los hechos fácticos podrían evidenciar la existencia de una amenaza o vulneración del derecho fundamental alegado, como lo hizo en sentencia T-571 del 2.015, donde señaló:

Ahora bien, en caso de que el actor no aduzca pruebas que apoyen su pretensión, la Corte Constitucional ha sido enfática en declarar la facultad – deber que le asiste al juez constitucional de decretar pruebas de oficio, con las cuales se pueda determinar si realmente existe una amenaza o vulneración del derecho. En Sentencia T-864 de 1999, señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo una potestad judicial, sino que es un deber inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado. También en Sentencia T-498 de 2000, la Corte se refirió a la facultad de decretar pruebas de oficio en un caso de tutela instaurado a favor de una menor de edad de edad que padecía un tumor cerebral. En esa oportunidad, señaló, que el juez constitucional como principal garante de los derechos fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la verificación de los hechos sometidos a su consideración, lo cual reclama del juez una mayor participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución.

Dada esa facultad, el despacho procederá a decretar pruebas de oficio, en busca de verificar los hechos sometidos a consideración, por lo que requerirá a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, para que en el término de dos (2) días, como anexos a sus informes, alleguen al despacho lo siguiente:

- Antecedentes Administrativos allegados a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, por el accionante, PEDRO ANTONIO OÑORO RAMOS, identificada con CC No 8.792.531 de Galapa, Atlántico para la CONVOCATORIA No. 746 de 2018- Convocatoria Territorial norte.
- Certifique la etapa en que se encuentra el Proceso de Selección de la CONVOCATORIA No. 746 de 2018- Convocatoria Territorial Norte.-

Por último y dado que la decisión que se adopte en la presente acción, eventualmente pudiera afectar los intereses de terceros que hacen parte de la Convocatoria No. 746 de 2018 Territorial Norte, ordenará a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, que publiquen en sus respectivas páginas web, la admisión de la presente acción de tutela, a fin de que se notifique a quienes pudieran

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

estar interesados en los resultados de la presente acción, quienes tendrán el término de dos (2) días para que se pronuncien sobre la demanda de tutela.

Ahora bien, decidido lo anterior, se advierte a las partes que el trámite de la presente acción de tutela se adelantará a través de los medios electrónicos y las decisiones se notificarán a las cuentas de correo electrónico que las partes informen a la Secretaría del Despacho.

Los informes, memoriales y recursos a los que tengan derecho las partes se presentarán a través del correo electrónico institucional del Despacho adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las decisiones que se adopten durante el trámite tutelar se registrarán en el software de gestión judicial "Siglo XXI", que podrá ser consultado en la página web de la Rama Judicial en el link <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017 se,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de decretar la medida provisional solicitada por el accionante, de conformidad a lo expuesto en la presente providencia.

2. ADMÍTASE la demanda que en ejercicio de la acción de tutela, presenta el señor **Pedro Antonio Oñoro Ramos**, quien actúa en nombre propio, contra la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**.

3. VINCULESE al presente trámite a la **Alcaldía del Municipio de Galapa, Atlántico**, en atención a lo dispuesto en la presente providencia.

4. COMUNÍQUESE el contenido de este auto a la accionante, por el medio más expedito y eficaz.

5. NOTIFÍQUESE personalmente el contenido de este auto al rector y/o representante legal de la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)**, al Comisionado Presidente y/o representante legal de la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)** y al alcalde del **Municipio de Galapa, Atlántico** y/o quien haga sus veces, por el medio más expedito y eficaz.

6. INFÓRMESE a las entidades demandadas y vinculada que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

7. REQUIÉRASE a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, para que en el término de dos (2) días, alleguen al despacho lo siguiente:

- Antecedentes Administrativos allegados a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, por el accionante, PEDRO ANTONIO OÑORO RAMOS, identificada con CC No 8.792.531 de Galapa, Atlántico para la CONVOCATORIA No. 746 de 2018- Convocatoria Territorial norte.



Rama Judicial del Poder P6blico
Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo del Atl6ntico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

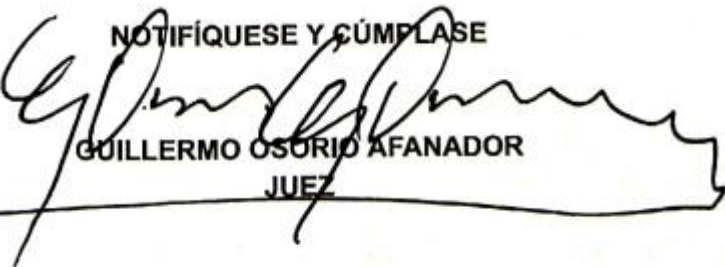
- Certifique la etapa en que se encuentra el Proceso de Selecci6n de la CONVOCATORIA No. 746 de 2018- Convocatoria Territorial Norte.-

8. ORDENAR a la **Universidad Libre de Colombia (UNILIBRE)** y a la **Comisi6n Nacional del Servicio Civil (CNSC)**, para que en el t6rmino perentorio de un (1) d6a, contado a partir de la notificaci6n del presente auto, publiquen por el medio que fue usado para comunicar el concurso, la admisi6n de la presente acci6n de tutela con ocasi6n de la Convocatoria No. 758 de 2018 Territorial Norte, con el prop6sito de que los terceros interesados, si as6 lo desean, puedan intervenir y ejerzan su derecho de defensa y contradicci6n, quienes tendr6n el t6rmino de dos (2) d6as para que se pronuncien sobre la demanda de tutela.

Las citadas entidades aportar6n a 6ste Juzgado el cumplimiento de 6sta orden en el t6rmino de dos (2) d6as h6biles.

9.- T6NGANSE como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

10. REITERAR que las comunicaciones, memoriales, informes y recursos con ocasi6n de 6ste tr6mite, se recibir6n en la cuenta de correo electr6nico : adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIF6QUESE Y C6MPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N6 084 DE HOY 12/08/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA